

CUBA

Informe por países sobre procedimientos relativos a los Derechos Humanos – 2008.

*Expedido por el Buró para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo
25 de febrero 2009*

Cuba, poblada por unos 11,2 millones de habitantes, es un Estado totalitario encabezado por el presidente Raúl Castro. En 2006, su hermano, Fidel Castro, cedió al general Raúl Castro el control provisional del Gobierno. Fidel Castro dimitió oficialmente como Presidente el 19 de febrero. El 24 de febrero, la Asamblea General eligió a Raúl Castro por unanimidad para que sucediera a su hermano como jefe de estado, presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas. Fidel Castro sigue siendo oficialmente Primer Secretario del Partido Comunista (PC). En las elecciones del 20 de enero a la Asamblea Nacional, que no fueron ni justas ni libres, el PC obtuvo el 98 por ciento de los votos y 606 de los 614 escaños. El Ministerio del Interior ejerce control sobre la policía, las fuerzas de seguridad nacional y el sistema penitenciario.

El Gobierno ha continuado negando a sus ciudadanos los derechos humanos fundamentales y cometiendo numerosos abusos graves. Niega a los ciudadanos el derecho a cambiar el gobierno. Al finalizar el año, entre presos y detenidos por razones políticas había al menos 205 reclusos. Hasta 5.000 ciudadanos cumplían condenas por “peligrosidad”, sin haber sido enjuiciados y sin que se especificara que hubieran cometido ningún delito. Han llegado informes de las siguientes infracciones de los derechos humanos: golpizas y abusos infligidos con impunidad contra detenidos y presos, incluidos los activistas de los derechos humanos; condiciones de encarcelamiento en extremo duras y peligrosas para la vida, incluida la negativa a prestar asistencia médica; hostigamiento, golpizas y amenazas contra los opositores políticos por parte de turbas reunidas por el Gobierno, agentes de policía o funcionarios de la Seguridad del Estado; arrestos y detenciones arbitrarios de defensores de los derechos humanos y de afiliados a asociaciones profesionales independientes; negación de juicio justo e imparcial e injerencia en la vida privada, incluida la vigilancia generalizada de las comunicaciones privadas. También se notaron limitaciones graves a la libertad de expresión y de prensa; negación de la libertad de reunión y asociación pacíficas; restricciones a la libertad de circulación, incluida la denegación selectiva de permisos de salida a ciudadanos y el traslado por la fuerza de personas de La Habana a sus lugares de procedencia; la restricción de la libertad de culto, y la negativa a reconocer a los grupos nacionales de defensa de los derechos humanos o a permitirles funcionar legalmente. También se manifestaron la discriminación contra los ciudadanos africanos, la violencia doméstica, la prostitución de menores, la trata de personas y las graves restricciones de los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a formar sindicatos independientes.

RESPECTO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 Respeto por la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometido a:

a. Privación arbitraria o ilegal de la vida

No se tuvo conocimiento de que el Gobierno ni sus agentes hubieran cometido asesinatos por motivaciones políticas.

b. Desaparición

No hubo informes de desaparecidos por motivos políticos.

c. Torturas, penas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

La ley prohíbe el trato abusivo de los detenidos y presos; sin embargo, las fuerzas de seguridad a veces golpean a los defensores de los derechos humanos y de la democracia, detenidos y presos, o cometen otros abusos contra ellos, y lo hacen impunemente.

Si bien la tortura física ha sido infrecuente, las autoridades han golpeado, hostigado y amenazado de muerte a disidentes, dentro y fuera de las prisiones. Muchos han sido detenidos repetidas veces, interrogados y amenazados de daños físicos para sí y para sus familias. Algunos han sufrido abusos físicos, a veces a manos de otros presos con la aquiescencia de los guardias, o largos períodos de estancia en celdas de aislamiento o de castigo. Los presos y detenidos por motivos políticos que se negaban a vestir el uniforme de preso o a participar en las actividades de “reeducación” han sido objeto de malos tratos.

El preso político Tomás Ramos Rodríguez, que fue liberado el 16 de junio después de 18 años de reclusión, ha declarado que en el presidio Combinado del Este, en la provincia de La Habana, las autoridades carcelarias golpean a los presos con cachiporras casi a diario e impunemente. Los familiares de los presos han seguido informando que el personal de la prisión a veces instiga a algunos reclusos, mediante promesas de recompensa, a que golpeen a algún preso político.

El Gobierno continúa sometiendo a los desafectos a “actos de repudio”, si bien esos incidentes, en especial los ocurridos frente a los hogares de los disidentes, han seguido disminuyendo claramente. El Gobierno se centra en la represión de los disidentes, ordenando a los militantes del PC, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Ex Combatientes de la Revolución Cubana y otros grupos e individuos que efectúen

protestas públicas contra los disidentes, normalmente frente a sus viviendas. Los participantes gritan insultos y obscenidades. Las turbas en ocasiones causa daños a la casa o los bienes de la víctima y a veces agrede a ésta o a sus familiares. Los principales disidentes, como Martha Beatriz Roque, continúan recibiendo amenazas de muerte. Aunque el Gobierno caracteriza los actos de repudio como espontáneos, unos agentes policiales y de Seguridad del Estado encubiertos están presentes a menudo y evidentemente dirigen las actividades, por ejemplo, amenazando a los vecinos con la pérdida del empleo si no participan. El Gobierno no ha detenido a ninguno de los participantes, incluso a los que atacaron físicamente a las víctimas, ni tampoco ha respondido la policía a las quejas de los agredidos.

En febrero, el médico Rodolfo Martínez Vigoa se quejó al Ministerio de Salud Pública de las condiciones en que se encontraba la clínica de Artemisa y de los sueldos que se pagaban a los empleados de ésta. Alrededor del 7 de marzo, se congregaron unas 300 personas frente a la residencia del Dr. Martínez, lo insultaron y lo llamaron traidor y contrarrevolucionario. Posteriormente, el Gobierno le retiró el permiso para ejercer su profesión.

En ciertos casos, las autoridades municipales hacen presión psicológica sobre los disidentes. El 4 de julio, el activista prodemocrático Antonio Chelanes Cruz fue esposado y sacado de su casa, aunque no había ofrecido resistencia. Al parecer, el jefe de la policía local le dijo que sería procesado por “peligrosidad” a menos que cesara toda actividad a favor de la Nueva República, un grupo de oposición. El 11 de julio, el jefe de policía lo llevó ante un grupo de vecinos y manifestó que Chelanes Cruz era antisocial, perezoso y contrarrevolucionario; le amenazó con encarcelarlo en cualquier momento.

Muy a menudo se niega a los hijos de los disidentes la inscripción en las universidades. Al parecer, los maestros y administradores escolares los insultan y califican de contrarrevolucionarios delante de sus compañeros.

Condiciones en las prisiones y los centros de detención

Las condiciones en las prisiones continúan siendo severas y peligrosas para la vida. Las condiciones en unos 200 centros de detención y cárceles fueron aun peores. Las celdas normalmente están infestadas de insectos, roedores y demás plagas y carecen de agua, instalaciones sanitarias, ventilación adecuada e iluminación. Muchos presos pasan meses aislados en celdas de castigo estrechas y oscuras. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) declara que los reclusos se quejan del hacinamiento generalizado, especialmente en las cárceles de máxima seguridad. Muchas de las celdas están húmedas y sufren de temperaturas extremas que provocan afecciones respiratorias graves y artritis. Las autoridades a menudo niegan a los presidiarios asistencia médica, visitas familiares, alimentación adecuada, exposición a la luz natural, pago por su trabajo y el derecho a presentar peticiones al director del penal.

Las condiciones sanitarias y la higiene en las cárceles continúan siendo muy malas. Muchos presos, como Tomás Ramos Rodríguez, libertado en junio tras 17 años de reclusión, han declarado que en los pisos de las celdas hay charcos contaminados con aguas negras. Llegan informes de que las letrinas son sólo plataformas de madera situadas sobre una cloaca abierta, sin medio alguno para tratar la suciedad. Algunos familiares han informado de la gran incidencia de padecimientos y enfermedades graves entre los presos políticos, a los cuales el personal de la prisión a veces niega el tratamiento. Han llegado informes repetidos de trastornos digestivos y dengue, así como de brotes de enfermedades de la piel causadas por el agua contaminada. La familia del preso político Ariel Sigler Amaya ha declarado que un médico diagnosticó que padecía de varias dolencias graves causadas por la desnutrición. Según el Consejo local de Relatores de los Derechos Humanos en Cuba (CRDHC), en marzo y abril fallecieron varios reclusos de la cárcel de Quivicán a causa de un brote de tuberculosis. Una antigua presa política ha declarado que en la Cárcel Provincial de Mujeres de La Habana, los brotes de tuberculosis son corrientes y que a las tuberculosas las alojan en la misma enfermería que a las embarazadas. Según la CRDHC, las autoridades carcelarias hacen muy poco por evitar o tratar la enfermedad. La CRDHC ha documentado que durante el año varios presos han muerto de ataques al corazón o de asma agudo, después de haber suplicado ayuda inútilmente durante varias horas. A menudo los presos, entre ellos Tomás Ramos Rodríguez, se extraen ellos mismos los dientes porque las autoridades no les permiten asistencia odontológica.

El CRDHC ha advertido que cada mes se suicidan varios presos en las cárceles y centros de detención, pero el Gobierno no divulga ninguna información al respecto.

El Gobierno encarcela a algunos presos que gozan de buena salud mental junto con reclusos perturbados.

Algunos presos recurren a la automutilación, a menudo para tratar de conseguir el traslado a una prisión más cercana a familia o para protestar las condiciones carcelarias. El 18 de julio, Juan Carlos Herrera Acosta, el periodista detenido en 2003 y recluido en la Prisión Provincial de Holguín, para empezar una huelga de hambre, se cosió la boca. El 31 de julio las autoridades de la prisión lo sojuzgaron y le quitaron la costura.

La comida de la prisión con frecuencia resulta incomedible y es menester conseguir alimentos externos para nutrirse. La dieta típica de los presos consiste en arroz medio crudo y casi siempre infestado de gorgojos o en un amasijo de soja con una cantidad minúscula de carne. Al parecer se permite a los familiares de los presos traerles de 15 a 20 kilos de comida cada dos o tres meses, pero las familias informan que los guardias a menudo impiden la entrega de los víveres. Normalmente, el agua que se usa para beber, bañarse y limpiar el agujero en el suelo de la celda que sirve de letrina común está contaminada, por ejemplo, con parásitos visibles.

El hacinamiento es algo corriente. Por lo común, 40 reclusos comparten un espacio destinado para 30, con lo cual muchos tienen que dormir directamente sobre el piso de concreto. Ana Rosa Ledea Ríos, encarcelada en 2003 y liberada en 2007, contó en septiembre que por más de 18 meses estuvo recluida, con otras dos, en una celda de 2 metros de largo por metro y medio de ancho, que era también su único comedor.

En las prisiones ocurren agresiones sexuales. Por los informes que llegan se deduce que la incidencia de las agresiones sexuales es mayor en las cárceles de mujeres. Los antiguos presos políticos especulan que esa diferencia se debe a las agresiones de otras presas así como a las de los guardas varones, y a que los presidiarios no toleran la participación forzosa en relaciones homosexuales entre hombres. Pero cuando esas agresiones ocurren, tanto en las prisiones de hombres como en las de mujeres, el personal de guardia con frecuencia pretende no verlas y no se castiga a los perpetradores.

El Gobierno no revela información alguna sobre el trato de los menores en las prisiones y centros de detención de menores y de adultos.

Las familias de los presos manifiestan que, algunas novelas aparte, no pueden entregar material de lectura a los reclusos. Las autoridades carcelarias niegan, por lo normal, otros derechos a los presos, como el derecho a la correspondencia.

El Gobierno a veces niega a los detenidos y presos políticos las visitas pastorales. Sin embargo, los detenidos declaran que las autoridades satisfacen las peticiones escritas de recibir visitas de sacerdotes católicos.

Muchos presos políticos están recluidos lejos de sus provincias de origen, lo que aumenta su sensación de aislamiento y la de sus familias. Sin embargo, en el curso del año el Gobierno ha trasladado a siete de los presos políticos que habían sido detenidos en 2003 a prisiones situadas en las provincias donde habían residido. En julio, las autoridades carcelarias concedieron a Luis Milán Fernández, uno de los 75 arrestados en 2003, permiso para pasar un fin de semana con su familia. En septiembre, las autoridades dieron permiso a Óscar Biscet, otro de los disidentes encarcelado en 2003, para que hiciera, bajo escolta, una visita de duelo.

El Gobierno no permite a los grupos de derechos humanos nacionales ni internacionales supervisar de manera independiente las condiciones carcelarias. El Gobierno no deja que las organizaciones humanitarias internacionales tengan acceso a los detenidos políticos. Desde 1988, el Gobierno ha venido negando al Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional y *Human Rights Watch* autorización para visitar las prisiones.

d. Arrestos o detenciones arbitrarios

Aunque la ley los prohíbe, los arrestos y las detenciones arbitrarios son abusos que comete comúnmente el Gobierno para hostigar a los opositores.

Función de la policía y del aparato de seguridad

El Ministerio del Interior controla a la policía y las fuerzas de seguridad nacional y el sistema penitenciario. La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) es el órgano coercitivo principal y por lo general resulta eficaz en la investigación de los delitos comunes. Las unidades especializadas del Departamento de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior están encargadas de la supervisión, infiltración y supresión de los grupos de oposición política. La PNR desempeña una función auxiliar, realizando allanamientos de domicilios y proporcionando instalaciones para interrogatorios a los agentes de la Seguridad del Estado.

Las fuerzas de seguridad actúan con impunidad en la comisión de numerosos abusos graves contra los derechos humanos. Aunque el Código de Ética de la PNR y el reglamento del Ministerio del Interior prohíben la brutalidad policial, el Gobierno no ha anunciado ninguna investigación de casos de mala conducta policial durante el año. La corrupción constituye una lacra. Según los grupos de defensa de los derechos humanos, tantas actividades económicas se consideran ilícitas y tantos ciudadanos, para sobrevivir, trabajan en el sector no estructurado, que la policía a menudo emplea la amenaza de detención para extraer dádivas y sobornos. Francisco Chiavano, antiguo preso político y activista pro demócrata, ha documentado que, en varias ocasiones la propia policía ayudó a una prostituta a alquilar una habitación en una vivienda particular para luego desalojar a la familia de esa vivienda, acusándola de “trata de personas”.

Los dirigentes del PC y los CDR vecinales carecen oficialmente de potestades coercitivas pero ejercen una autoridad considerable y a menudo la emplean para movilizarse contra cualquiera que critica al Gobierno o sus dirigentes.

Arresto y detención

La ley casi no limita expresamente a la policía en el uso de su criterio para parar o interrogar a los ciudadanos. La policía vigila las calles intensamente, y a menudo para al azar a los ciudadanos en las vías, vayan en vehículos o a pie, para interrogarlos. La ley no prevé proteger al ciudadano de esas detenciones con fines investigativos, y llegan muchas noticias de que esos casos han sido más frecuentes en el último año.

La policía tiene amplias facultades de detención, las cuales puede ejercer sin mandamientos judiciales. Conforme a la ley, la policía puede detener sin mandamiento no sólo a los que hallan en flagrante pero también a los meramente acusados de delitos contra la seguridad del Estado. Por ley, la policía no puede ejecutar registros sin mandamiento, pero tanto la CCDHRN como René Gómez Manzano, abogado defensor

de los derechos humanos, informan que la policía siempre dispone de un montón de mandamientos firmados y sellados que sólo tiene que llenar en cuanto los necesita.

El procedimiento penal se inicia cuando un ciudadano o agente de policía presenta una denuncia. Por ley, después del arresto la policía tiene un plazo de 24 horas para presentar la denuncia a un instructor de la policía. El instructor dispone entonces de 72 horas para investigar y preparar un informe al fiscal. Éste, a su vez, dispone de otras 72 horas para decidir si debe seguir el trámite del caso. Por ley, después de este plazo de 144 horas, o se acusa al arrestado judicialmente o se lo libera. En la práctica, este trámite se demora mediante pedidos de nuevas investigaciones, lo que la ley permite. Una vez presentada la acusación penal, el abogado defensor tiene derecho a examinar la acusación. La ley estipula que se tenga acceso a un abogado en el plazo de siete días; según informes, ese plazo suele cumplirse. No obstante, el fiscal puede pedir un juicio sumario, en cuyo caso el abogado a menudo sólo se reúne con el acusado pocos minutos antes de que comience la audiencia.

Se puede fijar fianza, lo que normalmente no se hace en los casos de presuntas actividades antigubernamentales. El tiempo de detención previo al juicio se considera como tiempo cumplido, si al acusado se le halla culpable. La ley estipula que los detenidos tengan acceso sin demora a un abogado; se nombra a un defensor público cinco días después de que al acusado se le notifique la fecha del juicio, si es que el acusado no ha nombrado a uno. Sin embargo, otras disposiciones de ley autorizan demoras en el acceso al abogado mientras se investiga el caso. El Gobierno niega a los presos y detenidos acceso pronto a sus familiares.

Las autoridades continúan deteniendo y arrestando arbitraria y habitualmente a los activistas de los derechos humanos. En la mayoría de los casos, se tenía detenidos a los disidentes por varias horas y luego se les ponía en libertad sin haberseles comunicado la acusación. La CCDHRN ha confirmado 1.500 detenciones de esa índole durante el año pero sospecha que ha habido muchas más. En 2007, hubo 325 detenciones parecidas. El 30 de enero, la Asamblea para Fomentar la Sociedad Civil en Cuba, oficialmente proscrita, informó que siete disidentes, entre ellos, Jorge Luis García (Pérez Antúnez) y su esposa Iris Pérez fueron aporreados y arrestados en Santa Clara cuando intentaban rendir homenaje al héroe de la Independencia de Cuba, José Martí, como protesta contra el Gobierno. El 21 de abril, diez afiliadas a las Damas de Blanco se reunieron en una plaza del centro de La Habana para protestar contra el encarcelamiento persistente de sus familiares, los cuales estaban entre un gran grupo de detenidos en 2003. Acudió a su encuentro una caravana de agentes de policía, que las detuvieron por la fuerza, colocaron en autobuses y retiraron de la zona. El 29 de julio, la policía política y la brigada de respuesta rápida impidió que 20 disidentes participasen en una marcha pacífica en Holguín que pretendía ser un acto de solidaridad con los presos políticos de conciencia. El vicepresidente de la Comisión Unida de Derechos Humanos, Ángel Luis Téllez Aguilera, fue arrestado, detenido varias horas y luego liberado sin cargos. El 12 de julio, la Seguridad del Estado detuvo en La Habana al disidente Francisco Chaviano y a por lo menos otros cinco activistas, que proyectaban participar en una manifestación.

La ley fija un plazo máximo de seis meses de detención antes de que la causa en cuestión se enjuicie. Si el fiscal decide, después de que se presente la acusación, que la causa necesita más investigación, la tramitación se devuelve al instructor. Si bien la ley da cierta orientación al respecto, no estipula un plazo para que el instructor retorne la causa al fiscal, y algunas personas han sido detenidas durante varios años sin un juicio después de que se hayan retornado sus causas al instructor. A fin de año, el disidente Vladimir Alejo Miranda había estado encarcelado desde febrero de 2007 sin que se le formulara la acusación; Ihosvani Suris de la Torre y Máximo Pradera Valdez están en prisión sin cargos desde 2001.

El disidente Jorge Luis García Pérez Antúnez ha estado virtualmente bajo arresto domiciliario en su pueblo de Placetas. Antúnez ha estado confinado en su casa por lo menos una vez al mes y durante varias horas cada vez; durante todo el año, se le ha venido deteniendo en La Habana y devuelto forzosamente a Placetas. Después de cada detención, ha sido liberado sin cargos.

e. Negación de juicio público e imparcial

Si bien la Constitución dispone la independencia de los tribunales, de manera explícita los subordina a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y al Consejo de Estado. La ANPP y sus homólogos inferiores eligen a todos los jueces. De esa manera, en la práctica, el PC tiene a todos los tribunales bajo su dominio.

Hay tribunales civiles a los niveles municipales, provinciales y de apelación, presididos por grupos especiales compuestos por jueces profesionales y legos. Los tribunales militares, regidos por una legislación especial, asumen jurisdicción sobre ciertas causas “contrarrevolucionarias”. Los tribunales militares juzgan a los acusados civiles si en el delito participa, junto a ellos, un integrante del ejército, de la policía o de cualquier cuerpo uniformado oficial. En esos tribunales hay derecho de apelación y acceso a un abogado, y se informa de los cargos a los acusados.

Procedimientos de juicio

Los tribunales restringen el derecho a la defensa y a menudo no guardan respeto por las garantías legales, de las que nominalmente disfrutaban los acusados. Casi todos los juicios han sido públicos en principio, pero cuando se trataba de presuntas infracciones de la seguridad del Estado, se han celebrado a puerta cerrada. Casi todas las causas se han juzgado en menos de un día; no hay juicios por jurado. La ley dispone que el acusado tiene derecho a un defensor y, salvo en casos relacionados con la seguridad del Estado, el derecho a consultar a un abogado oportunamente. Sin embargo, cuando el fiscal pide un juicio sumario (lo que ahora es relativamente infrecuente), muchos acusados no tienen defensor o se reúnen con él sólo minutos antes de que comience el juicio. Esto es especialmente cierto en las causas por “peligrosidad”. En noviembre, después de la escasez provocada por dos ciclones devastadores, las autoridades arrestaron a centenares por diversas actividades, por ejemplo, las ventas callejeras sin

autorización o la posesión de material de construcción. La judicatura condenó en juicios sumarios a varios a períodos de reclusión de uno a cuatro años, muchos de esos juicios tuvieron lugar en las estaciones de policía y no en los tribunales. El control que el Gobierno ejerce sobre los abogados integrados en bufetes colectivos coarta su capacidad para representar a los clientes, en especial, a los acusados de delitos contra la seguridad del Estado.

Los criterios para la presentación de pruebas son arbitrarios y discriminatorios. Se observa sólo de manera arbitraria el derecho del acusado a presentar testigos. A los abogados defensores se les da acceso al expediente policial y a la acusación escrita del fiscal sólo en el momento del juicio o unos minutos antes. La ley dispone que todas las libertades civiles reconocidas jurídicamente pueden denegarse a cualquiera “que se oponga activamente a la decisión del pueblo de construir el socialismo”. El Gobierno usa comúnmente esa autoridad para denegar los derechos jurídicos a los detenidos presuntamente por razones de la seguridad del Estado. En las causas por “la seguridad del Estado”, los abogados defensores no tienen acceso a los expedientes de la policía ni a la investigación de la fiscalía. Debido a esas limitaciones y a que la mayoría de los juicios duran menos de ocho horas, los abogados defensores a menudo no tienen tiempo de tomar medidas para lograr que los peritos de la defensa presenten testimonio

El Código Penal define el concepto de “posible peligrosidad” como la inclinación especial de una persona a cometer delitos, demostrada por una conducta en contradicción manifiesta con las normas socialistas. No hace falta prueba para que al acusado se le condene por esa contravención. La CCDHRN calcula que por lo menos 5.000 ciudadanos, mil de ellos mujeres, están en la cárcel por ese motivo. La CCDHRN ha publicado una lista de seis causas nuevas de presos políticos condenados por “posible peligrosidad” durante el año. Sin embargo, las autoridades aplican esta ley más a menudo a los jóvenes sin relaciones políticas que no se presentan a los centros laborales a causa de los bajos jornales que les ofrecen, a las jóvenes que practican la prostitución, y a las personas que vuelven repetidas veces a La Habana después de haber sido enviadas a sus provincias de origen.

El 25 de agosto fue detenido Gorki Águila Carrasco, músico que se ha dado a conocer por ridiculizar al sistema comunista y en particular, a los hermanos Castro. El 29 de agosto, tras un juicio de dos horas, fue condenado por desorden público, multado 600 pesos (28 dólares) y liberado. La acusación más grave que se le había hecho de “peligrosidad” se declaró sin lugar, pero se le ordenó el pago de la multa en 300 plazos semanales de 2 pesos cada uno (menos de \$0,10), lo que en realidad le deja en libertad condicional durante más de cinco años.

Los fiscales pueden presentar el testimonio de un integrante de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) acerca de los antecedentes revolucionarios del acusado, lo que puede contribuir a alargar o abreviar la condena. La ley presume la inocencia del acusado, pero en la práctica, las autoridades a menudo obvian ese derecho. La ley reconoce el derecho de apelación en los procesos de los tribunales

municipales pero lo limita en los tribunales provinciales a causas que entrañen largas condenas de privación de libertad o penas de muerte. Las apelaciones en las causas capitales son automáticas. El Consejo de Estado debe ratificar las penas capitales. El 29 de abril, el general Raúl Castro conmutó un número no especificado de penas de muerte por las de cadena perpetua. Según el CCDHRN, esta decisión se refería a 30 reclusos.

Presos y detenidos por motivos políticos

La CCDHRN afirma que, a finales de año, el Gobierno tenía reclusos al menos a 205 presos y detenidos políticos, en comparación con 240 a fines de 2007. Esas condenas se habían dictado por motivos como desacato al Jefe del Estado, ultraje de los símbolos patrios, desorden público e intento de abandonar el país ilegalmente. Otros reclusos han sido condenados por distribuir propaganda enemiga, asociación ilícita, impresión clandestina o rebelión en general, lo que se ha aplicado a veces a los defensores del cambio democrático pacífico. Por ejemplo, el 2 de febrero la policía golpeó y detuvo al activista de los derechos humanos Mijail Capote Aranda, por expresar opiniones contrarias al Gobierno en Manzanillo (provincia de Granma). Un tribunal lo condenó a tres años de encarcelamiento por falta de respeto al Jefe del Estado y agresión a agentes de la policía.

Las autoridades siguen empleando las detenciones a corto plazo, aunque ahora lo hacen con mucha más frecuencia, en lugar de presentar acusaciones por infracciones que se reprimen con encarcelamientos prolongados. Durante el período del presente informe, se amenazaba a los disidentes a menudo con enjuiciarlos por “peligrosidad”, aunque pocos fueron procesados o condenados por ese motivo. No obstante, ha seguido siendo alto el número de condenas por “peligrosidad” durante este período, pero la mayoría de los condenados por ese motivo no tenían afiliaciones políticas.

Al finalizar el año, permanecían en prisión 55 de los 75 activistas pacifistas, periodistas, organizadores de sindicatos y figuras de la oposición arrestados y condenados en 2003, en su mayoría acusados de atentar contra la seguridad nacional y ayudar a una potencia extranjera. El 18 de febrero, el presidente Raúl Castro liberó y exilió a España a cuatro de los 75 condenados originalmente por razones humanitarias.

Ha habido maltrato generalizado de los presos y detenidos por motivos políticos. Las palizas han sido frecuentes. El 20 de mayo, los guardas en la cárcel provincial de Guantánamo agredieron a José Daniel Ferrer García cuando trataba de telefonar a un defensor de los derechos humanos, Juan Carlos González Leiva.

A muchos reclusos políticos se les han negado los privilegios que se otorgan a los presos comunes, como el acceso a un patio de ejercicio o a la luz del sol. El Gobierno ha continuado negando a las asociaciones de defensa de los derechos humanos y al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a los presos y detenidos políticos. Las autoridades siguen denegando las visitas de familiares a los presos políticos. Los presos que se hallan en las celdas de castigo no tienen acceso a abogados.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Existe una judicatura de lo civil. Sin embargo, estos tribunales se usan casi exclusivamente para asuntos de familia, como los casos de divorcio y de tutela de menores. La mayoría de las infracciones de las disposiciones relativas a actos ilícitos civiles se dirimen en los tribunales penales. Un ciudadano sólo puede pedir compensación por una infracción de los derechos por medio de una querrela penal. Durante el año, la CCDHRN no ha sabido que haya prosperado ningún procesamiento relacionado con los derechos humanos o de que un tribunal hubiera ordenado el pago de daños y perjuicios. En las causas por brutalidad de la policía o en las causas en las que figura un militar, las acusaciones deben presentarse ante un tribunal militar. La CCDHRN manifiesta que como el PC y el Gobierno controlan las fiscalías y los tribunales, los ciudadanos no se inclinan a presentar denuncias en regla.

f. Injerencia arbitraria en la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia

La Constitución dispone la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia del ciudadano; sin embargo, la vigilancia de los asuntos privados y familiares llevada a cabo por entidades controladas por el Gobierno, como los CDR, sigue siendo omnipresente. El Gobierno emplea la vigilancia física y electrónica contra los opositores no violentos y se injiere en la vida de los ciudadanos. Las autoridades emplean una amplia gama de controles sociales con el objetivo de descubrir y desalentar la disconformidad.

La Seguridad del Estado lee sistemáticamente la correspondencia internacional. Muchas cartas del extranjero se entregan con el sobre evidentemente abierto y vuelto a cerrar; otras se insertan en sobres diferentes. La Seguridad del Estado tiene vigiladas las llamadas telefónicas nacionales e internacionales, la correspondencia y las conversaciones con extranjeros. Durante el año, un tráfugo declaró públicamente que el Gobierno tiene “pinchados” permanentemente miles de teléfonos y que escucha las líneas de los diplomáticos, periodistas y comerciantes extranjeros, así como las de los disidentes del país.

Los agentes de la Seguridad del Estado someten a periodistas y diplomáticos extranjeros a hostigamiento y vigilancia, incluida la vigilancia electrónica y las entradas subrepticias en sus viviendas. Las autoridades también hostigan psicológicamente a los antiguos presidiarios, uno de los cuales informó que le pintaron “Viva la Revolución” en la pared de la sala y le amenazaron con la detención si tapaba ese letrero con pintura.

Según las entidades de la sociedad civil, se ha intensificado la vigilancia oficial de los disidentes. El 25 de agosto, tres disidentes destacados, Martha Beatriz Roque, Vladimiro Roca y Jorge Luis Pérez García Antúnez, presentaron una querrela ante el Ministro de Justicia, quejándose de que sus correos electrónicos, llamadas telefónicas, videos personales, fotografías y otros documentos habían aparecido en público, en la

prensa escrita y en la televisión, sin su consentimiento y en contravención de la ley. Después de un lapso de 60 días, los tres disidentes presentaron otra querrela de que el Ministro había infringido la ley al no responder en el plazo estipulado legalmente. Un juez decidió que la causa debía investigarse en vista de la gravedad de la acusación y remitió la segunda querrela a la misma dependencia. A fin de año no había habido ninguna reacción oficial.

Han llegado numerosos informes fehacientes de desalojos forzosos de ocupantes ilegales y otros que carecían de permiso oficial para residir en La Habana y en otras de las ciudades principales. Una publicación oficial, *Juventud Rebelde*, declaró el 3 de agosto que desde 2006 las autoridades habían desalojado a más de 20.000 personas que vivían en las cercanías de La Habana en aldeas improvisadas de ocupantes ilegales, los cuales habían sido devueltos a sus provincias de origen.

El Ministerio del Interior emplea un sistema de informantes y comités vecinales (CDR) para seguir de cerca y controlar la opinión pública. Según varias fuentes, en septiembre hubo un aumento de la vigilancia después de los ciclones Gustav e Ike, y los agentes de la Seguridad del Estado estaban apostados en los mercados campesinos para captar cualquier crítica implícita del Gobierno por la escasez de alimentos. Está generalizada la creencia de que la Seguridad del Estado trataría de identificar a los críticos, posiblemente para castigarlos después. Los CDR continúan informando acerca de las actividades sospechosas, entre las que se incluyen el consumo llamativo; las reuniones no autorizadas, incluidas las reuniones con extranjeros, y las actitudes tildadas de desafiantes hacia el Gobierno y la Revolución.

Sección 2 Respeto por las libertades civiles, incluidas:

a. Libertad de expresión y de prensa

La Constitución reconoce la libertad de expresión y de prensa en tanto se conforme a los fines de la sociedad socialista; esa última frase impide, de hecho, la libertad de expresión; en la práctica, el Gobierno no permite críticas contra la Revolución y sus dirigentes. Las leyes contra la propaganda antigubernamental, las pintadas y el desacato a las autoridades estipulan penas de tres meses a un año de prisión; si el presidente o los miembros de la ANPP o del Consejo de Estado son objeto de crítica, la pena es de tres años de privación de la libertad. Las acusaciones de difusión de propaganda enemiga, lo que incluye la mera expresión de opiniones encontradas con las del Gobierno, pueden acarrear condenas de hasta catorce años. En opinión del Gobierno, los informes internacionales sobre infracciones de los derechos humanos y los principales periódicos y revistas del extranjero son propaganda enemiga. Los CDR vecinales inhiben la libertad de expresión y vigilan y notifican cualquier disensión o crítica.

Los sacerdotes católicos y otros clérigos pueden pronunciar sus sermones sin tener que someterlos previamente a la aprobación del Gobierno. Se permite a los jerarcas de

la Iglesia Católica transmitir programas radiales de 15 minutos en las grandes ocasiones, como la Navidad, siempre y cuando no tengan contenido político alguno.

El Gobierno considera que los medios impresos y electrónicos son propiedad del Estado. El Gobierno es dueño de todos los medios de comunicación, a los que el PC controla, salvo algunas circulares clandestinas. El Gobierno tiene en funcionamiento cuatro estaciones de televisión y seis estaciones de radio nacionales, una estación de radio internacional, una revista nacional y tres diarios nacionales. Además, tiene muchas estaciones de radio y de televisión locales, así como revistas y periódicos. Todos son órganos oficiales del PC. El contenido es prácticamente uniforme en todos esos medios de información; ninguno disfruta de independencia editorial. El régimen enjuicia con diligencia todo intento de distribuir materiales escritos, cinematográficos o fotográficos sin autorización. La ley prohíbe los "impresos clandestinos". El Gobierno es el único editor de libros del país y, salvo algunas publicaciones católicas, los censores estatales exigen que se pase por su aprobación previa a la publicación.

El Gobierno somete a los periodistas independientes a prohibiciones de viaje, así como a la detención, el hostigamiento de familiares y amigos, la incautación de material, y las amenazas de prisión. Algunos agentes de Seguridad del Estado se hacen pasar por periodistas para allegar información sobre los activistas, difundir noticias falsas y sembrar la desconfianza entre los periodistas independientes. Durante el año, al menos 25 periodistas estuvieron encarcelados.

La ley prohíbe la distribución de materiales impresos de fuentes extranjeras. Los ciudadanos no tienen derecho a recibir ni a poseer publicaciones extranjeras, aunque en algunos hoteles para extranjeros y ciertas tiendas de venta en divisas distribuyen diarios y revistas extranjeros en pequeñas cantidades. En marzo, una turba organizada por el Gobierno agredió a unos manifestantes que repartían ejemplares de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los manifestantes fueron detenidos después. El Gobierno sigue interfiriendo en las transmisiones de Radio Martí y Televisión Martí.

El Gobierno con frecuencia impide que las bibliotecas independientes reciban materiales del exterior y se incauta de los materiales donados por diplomáticos extranjeros.

Libertad de la Internet

Casi todo el acceso a la Internet está controlado por el Gobierno. Las autoridades revisan y censuran los correos electrónicos. Las autoridades también emplean filtros de búsqueda en la Internet e impiden el acceso a los sitios *web* que consideran objetables. Los ciudadanos pueden tener acceso a la Internet sólo por medio de instituciones aprobadas por el Gobierno, salvo por los servicios de la Internet proporcionados por unas pocas oficinas diplomáticas. A pesar de la decisión gubernamental del 21 de marzo de permitir que los ciudadanos compren computadoras personales, el acceso a

la Internet está muy controlado y sólo se permite a los que se consideran fiables ideológicamente. Los únicos ciudadanos a los que se les concede acceso directo a la Internet son algunos funcionarios y varios médicos, profesores y periodistas que gozan de aprobación oficial. El Gobierno también restringe el uso de la Internet en sus propias oficinas, limitando a la mayoría de los funcionarios a las páginas *web* relacionadas con su trabajo. En marzo y abril las autoridades restringieron aún más el uso de la Internet, impidiendo el acceso de los ciudadanos a ciertos sitios independientes de la *web*. A los extranjeros y a los ciudadanos se les permite comprar tarjetas de acceso a la Internet del proveedor nacional de telecomunicaciones y usarlas en los centros de negocios de hoteles donde sólo se puede comprar con pesos convertibles. El acceso suele costar de 128 a 288 pesos convertibles por hora (entre \$5,76 y \$12,51), tarifa que no está al alcance de la mayoría de la población. El Gobierno informó que menos del 12 por ciento de la población usó los servicios de la Internet en 2007, pero esa cifra incluye a los ciudadanos que únicamente tenían acceso a la *intranet* del Gobierno en sus empleos.

Una ley exige que todos los centros públicos de la Internet tienen que estar inscritos oficialmente, y permite que sean objeto de control y supervisión, sin previo aviso, por el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.

Si bien la ley no dispone ningún castigo específico por el uso de la Internet, es ilícito poseer una antena parabólica que permita el acceso a la Internet sin censura, vía satélite. En diciembre el Gobierno ha ordenado a los proveedores de la Internet pública que impidan el acceso a los sitios “cuyo contenido sea contrario a los intereses sociales y morales o a las normas de la comunidad” o que “afecten a la integridad o la seguridad del Estado”. El mismo decreto ordena a los proveedores de la Internet que impidan que se utilice *software* de cifrado (encriptación) y el traslado de material a archivos cifrados.

El 3 de diciembre, los agentes de la Seguridad del Estado advirtieron a la bloguera Yoani Sánchez que no celebrara la conferencia proyectada de blogueros cubanos; de todas maneras lo hizo y hasta fin de año no parecía haber sufrido ninguna consecuencia.

Libertad académica y acontecimientos culturales

El Gobierno limita las libertades académicas y continúa destacando la importancia de robustecer la ideología y la disciplina revolucionarias. Se exige a los estudiantes que juren lealtad a los principios del PC y que hagan de Ernesto “Che” Guevara el modelo de su vida. Se prohíbe a los académicos reunirse con algunos diplomáticos sin previa aprobación oficial. Los académicos a quienes el Gobierno permite viajar al exterior saben que sus actos, si se consideran desfavorables desde el punto de vista político, pueden repercutir negativamente sobre sus familiares en la isla.

Durante el año ha habido despidos de maestros y profesores por motivos políticos. Por ejemplo, el 30 de junio las autoridades escolares despidieron al maestro de educación física Raúl Velázquez Valdés por hablar sin respeto de las instituciones de la República y de los héroes y mártires del país. Sin embargo, el académico independiente Roberto de Miranda manifestó que ha habido, durante el año del presente informe, muchos menos despidos que en años anteriores.

Las expulsiones de estudiantes universitarios por motivos políticos también han disminuido durante año, aunque hubo algunas. En marzo fue expulsado Néstor Pérez González de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pinar del Río, por haber sido coautor de un artículo sobre la transición a la democracia en España para la revista en línea *Convivencia*.

Las bibliotecas públicas, controladas por el Gobierno, exigen una carta oficial de autorización para dar acceso a los libros y la información.

La admisión a la universidad normalmente depende de la participación del estudiante durante la enseñanza secundaria en las actividades que patrocina el Gobierno.

b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

Si bien la Constitución reconoce ciertos derechos de reunión y de asociación, los condiciona a que no “se ejerzan en contra de la existencia y los objetivos del Estado Socialista”.

Libertad de reunión

La ley castiga con pena máxima de tres meses de prisión y multa toda reunión no autorizada de más de tres personas, incluidas las que ocurran durante los servicios religiosos privados en domicilios particulares. Según las entidades de la sociedad civil se ha intensificado la represión del derecho de reunión.

Las autoridades nunca han aprobado una reunión pública de un grupo de defensa de los derechos humanos y detienen a los activistas brevemente pero con mayor frecuencia que en años anteriores, para impedirles asistir a reuniones, manifestaciones o ceremonias. La CCDHRN informa que las detenciones breves han aumentado de 325 en 2007 a más de 1.500 durante el año de este informe. Las detenciones parecen

coincidir con las fechas de las reuniones y manifestaciones planificadas, entre ellas, los acontecimientos que se celebran en las representaciones diplomáticas.

Libertad de asociación

La ley prohíbe expresamente toda agrupación no reconocida y el Gobierno niega a los ciudadanos la libertad de asociación. Las autoridades nunca han aprobado la existencia de grupos de defensa de los derechos humanos; sin embargo, varias asociaciones profesionales actúan como organizaciones no gubernamentales (ONG) aunque sin reconocimiento jurídico. La Constitución proscribe todas las asociaciones políticas salvo el Partido Comunista de Cuba (PC).

Las iglesias reconocidas, la entidad humanitaria católica Cáritas, el movimiento masónico y algunas hermandades o asociaciones profesionales son las únicas entidades permitidas fuera del control del Estado, aunque no fuera de su influencia, de la del PC y sus agrupaciones de masas. Las autoridades continúan desconociendo las solicitudes de reconocimiento jurídico de nuevos grupos, entre ellos, varias nuevas entidades religiosas y de defensa de los derechos de los homosexuales, lo que hace que sus afiliados se expongan a acusaciones de asociación ilícita.

c. Libertad de culto

Si bien la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a profesar y practicar cualquier creencia religiosa en el marco del respeto a la ley, el Gobierno sigue coartando la libertad de culto. El Gobierno exige a las iglesias y otros grupos religiosos inscribirse en el registro provincial de asociaciones del Ministerio del Interior, a fin de obtener el reconocimiento oficial.

El Gobierno no ha mostrado preferencia por ninguna religión ni iglesia en particular; sin embargo, el Gobierno parece haber sido más tolerante con las iglesias que han mantenido relaciones estrechas con el Estado por intermedio del Consejo Cubano de Iglesias (CCI). El CCI comprende 25 entidades religiosas que son miembros plenos, más nueve adjuntas y tres observadoras. No incluye a la Iglesia Católica de Cuba. En enero fueron elegidos a la Asamblea Nacional tres pastores protestantes y un babalao (sacerdote santero).

Han llegado numerosos informes de discriminación oficial contra los Adventistas del Séptimo Día y los Testigos de Jehová en lo que hace al empleo y la educación. Esa discriminación se debe a que en sábado esos grupos se niegan a trabajar y a participar en actividades escolares obligatorias y, en el caso de los Testigos de Jehová, se niegan también a cumplir con el servicio militar obligatorio.

El Gobierno raramente ha permitido la construcción de nuevas iglesias; sin embargo, permite cada vez más la restauración y ampliación de las iglesias existentes.

Una directiva del Gobierno requiere que los responsables de los templos ubicados en casas particulares los inscriban oficialmente. Para hacerlo, el responsable debe cumplir una serie de condiciones, por ejemplo, limitar las reuniones semanales al número que especifique el funcionario a cargo. La gran mayoría de las viviendas templo no están inscritas y por lo tanto, técnicamente, son ilícitas.

La educación es laica y no se permiten las instituciones educativas religiosas. Sin embargo, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes y las sinagogas judías pueden ofrecer clases de educación religiosa a sus fieles, así como clases de educación de adultos al público en general.

Los escritos y demás materiales religiosos deben importarse por conducto de grupos religiosos inscritos y sólo pueden distribuirse a los grupos religiosos oficialmente reconocidos.

El Gobierno autoriza a cada una de las diócesis católicas a solicitar períodos de transmisión para un programa radial de 15 minutos en Navidad, Pascua y el día de la Virgen de la Caridad, la santa patrona de Cuba.

Se exige que los grupos religiosos soliciten la autorización de las autoridades locales del PC antes de la celebración de procesiones u otros acontecimientos fuera de los edificios religiosos.

Abusos y discriminación sociales

No han llegado informes de violencia social, hostigamiento o discriminación contra los feligreses. La población de la comunidad judía se calcula entre 1.000 y 1.500 personas. No ha habido informes de acciones antisemitas.

Para un examen más detallado, véase el *2008 International Religious Freedom Report* (Informe Internacional sobre la Libertad de Culto en 2008) en www.state.gov/g/drl/irf/rpt.

d. Libertad de circulación, personas desplazadas en el país, protección a los refugiados y apátridas

La ley condiciona la libertad de circulación dentro o fuera del país, la emigración y la repatriación; en la práctica el Gobierno restringe esos derechos severamente. El Gobierno limita sumamente los viajes de los disidentes por el interior del país y el extranjero y limita la migración interna de las zonas rurales a La Habana. A menudo, las autoridades paran a los disidentes que se encuentran de visita en La Habana y los llevan sin demora y bajo escolta a sus provincias de origen.

La Constitución permite a todos los ciudadanos viajar a cualquier parte del país, pero la residencia está muy restringida, lo que impide la libertad de circulación. Las comisiones locales de vivienda y las autoridades provinciales estudian las solicitudes de cambio de

residencia, principalmente en vista del espacio disponible. Durante la espera por el permiso, que normalmente se demora seis meses o más, el solicitante no puede obtener raciones alimentarias ni tarjeta de identidad local en la población nueva. Cualquiera que resida ilegalmente puede ser multado y enviado a su lugar de procedencia. Aunque este reglamento es de efecto nacional, donde más frecuentemente se aplica es en La Habana. Las agrupaciones de defensa de los derechos humanos manifiestan que la expulsión de jóvenes y otras personas de La Habana a las provincias orientales ha aumentado a más de 100 semanales. La policía amenaza con enjuiciar por “peligrosidad” a cualquiera que regrese a La Habana después de haber sido expulsado.

El Gobierno restringe tanto la emigración como los viajes temporales al extranjero, principalmente mediante el requisito del permiso de salida. Aunque el Gobierno permite la salida de la mayoría de las personas que cumplen con los requisitos para tener la condición de inmigrante o refugiado en otros países, a 247 ciudadanos o familiares a cargo, que habían recibido los documentos de viaje al extranjero, se les ha negado el permiso de salida durante el año. Esa cifra representa sólo a las personas que habían notificado sus dificultades a las representaciones diplomáticas extranjeras. Entre las personas a quienes se les suele negar el permiso de salida está el personal médico, los varones en edad militar, los disidentes y los ciudadanos que tienen determinadas ideas políticas o creencias religiosas.

Una norma oficial, aunque no publicada, niega a los profesionales de la medicina permisos de salida hasta tanto no hayan servido en su profesión un promedio de seis a ocho años a partir del momento en que solicitan el permiso para viajar al extranjero. Las enfermeras y los auxiliares técnicos de la medicina aguardan un promedio de dos a tres años para que se les conceda el permiso de salida.

El Gobierno ha denegado permisos de salida durante varios años a los parientes de los que habían emigrado ilegalmente, como por ejemplo, a tripulantes de la marina mercante y personalidades del deporte que habían desertado mientras estaban fuera del país. El Gobierno con frecuencia les retiene las visas de salida a fin de controlar a los disidentes. Una médica disidente, la Dra. Hilda Molina, sigue esperando desde hace quince años su permiso de salida, aunque a su madre anciana se le permitió viajar en junio a la Argentina, donde tiene familia.

El Gobierno negó el permiso de salida a algunos activistas de los derechos humanos que tenían en su poder documentos válidos para viajar al extranjero. En abril, las autoridades denegaron permiso de viajar a España a la bloguera Yoani Sánchez, que se disponía a recibir un premio prestigioso de periodismo. A los disidentes destacados Francisco Chaviano y Jorge Luis Pérez García Antúnez se les denegó permiso para viajar al exterior para tratamiento médico de los graves quebrantos de salud que habían sufrido durante sus largos encarcelamientos.

El Gobierno también ha utilizado el exilio interno y el externo. Las autoridades pueden, por ley, prohibir a una persona ir a determinada zona o salir de ella durante un período

de uno a diez años. En virtud de esa disposición, las autoridades pueden exiliar a cualquier persona cuya presencia en un lugar determinado se considere “socialmente peligrosa”. Las autoridades advierten habitualmente a los disidentes y a sus familiares que emigraban de no hacer declaraciones condenatorias del Gobierno en el exterior, porque eso podría tener repercusiones para los parientes que quedaran en Cuba, como la pérdida del empleo o la denegación del permiso de salida del país.

Los que procuran emigrar legalmente también manifiestan que son objeto de multas, represalias, hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades, como el cambio de empleo involuntario, la amenaza de arresto y la cesantía. Los derechos por concepto de exámenes médicos, pasaporte e impuestos aeroportuarios sólo se pagan en pesos convertibles, y representan aproximadamente 630 de esos pesos (\$680,40) para un adulto, lo que equivale a casi tres años de salario. Esos derechos significan grandes privaciones, sobre todo para los presuntos emigrantes que habían sido expulsados de su empleo por carecer de confiabilidad política y, por lo tanto, estaban privados de ingresos. Al concluir el año, algunos refugiados no habían podido abandonar el país por no poder pagar los derechos de salida. Las autoridades, por lo general, desposeen a los presuntos emigrantes y sus familiares de viviendas y de casi todas las pertenencias antes de permitirles abandonar el país. El Gobierno también exige el pago de multas importantes por cualquier intento anterior de salir del país ilícitamente.

La ley prevé penas de prisión de hasta tres años o una multa de 300 a 1.000 pesos (\$11 a \$38) por salidas no autorizadas en lanchas o balsas. A veces, el Gobierno también aplica una ley sobre la trata de personas a los posibles emigrantes. La ley prevé de tres a cinco años de reclusión para los que organizan o promueven las salidas ilícitas del territorio nacional o incitan a ellas. Según cálculos de la CCDHRN, al finalizar el año unos 300 ciudadanos cumplían condenas o aguardaban juicio por esa acusación, que normalmente conlleva una pena de 15 a 20 años de prisión. En virtud de los Acuerdos Migratorios de 1994 entre los Estados Unidos y Cuba, el Gobierno ha acordado no encausar ni tomar represalias contra los emigrantes que fueran devueltos de aguas internacionales o de los EE.UU., o de la Base Naval de los EE.UU. en Guantánamo, luego de intentar emigrar ilegalmente, siempre y cuando no hubiesen cometido otro delito. Sin embargo, en la práctica, algunos de los repatriados en virtud de los Acuerdos Migratorios informan haber sido víctimas de hostigamiento y discriminación, por ejemplo, multas, expulsión de la escuela, pérdida del empleo y detención carcelaria.

Por lo general, el Gobierno se niega a aceptar a sus nacionales cuando se devuelven del territorio de los Estados Unidos pero más allá de los límites marítimos fijados en los Acuerdos Migratorios. El 4 de diciembre, en virtud de un nuevo acuerdo migratorio con México, Cuba aceptó la repatriación de México de 41 cubanos.

Protección de refugiados

Si bien el país no es Parte en la Convención de las Naciones Unidas relativa al Estatuto de los Refugiados de 1951 ni en su Protocolo de 1967, la Constitución estipula que se otorgue asilo a los perseguidos por sus ideales o por haber cometido algún acto especificado de carácter político. Aunque el Gobierno no tiene ningún mecanismo oficial para conceder asilo a nacionales extranjeros, en la práctica ofrece protección contra la expulsión o el retorno de personas a países donde su vida o libertad estaría amenazada, incluidos algunos prófugos de la justicia a quienes el Gobierno define como refugiados por motivos políticos.

El Gobierno coopera con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras entidades humanitarias en la prestación de ayuda a un pequeño número de refugiados y solicitantes de asilo en el país. El Gobierno ha permitido que unos pocos solicitantes de asilo, identificados por la ACNUR, permanezcan en Cuba mientras se procura establecerlos en un tercer país. Además, el Gobierno ha autorizado la permanencia en el país de estudiantes extranjeros de medicina que temían que se los persiguiera al repatriarse al fin de los estudios, mientras se investiga si sus temores se justifican.

Sección 3 Respeto por los derechos políticos: el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

Pese a que la Constitución estipula la elección directa de los gobiernos provinciales y municipales y de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), los ciudadanos no tienen derecho a cambiar de gobierno y el Gobierno ha tomado represalias contra los que han tratado de fomentar el cambio político pacífico.

El 19 de febrero, Fidel Castro dimitió oficialmente como Presidente, poniendo fin a casi 50 años de mandato. El 24 de febrero, la Asamblea Nacional eligió por unanimidad a su hermano Raúl Castro para sucederle como jefe de estado, presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas. Las instituciones vigentes no democráticas, entre ellas, las fuerzas armadas, el PC y la Asamblea Nacional, convalidaron ese cambio.

En las elecciones a la Asamblea Nacional, celebradas durante el año, se alentaba enérgicamente a los electores que indicaran sencillamente su aprobación o desaprobación de una lista unida de candidatos, aprobada por el PC. El Gobierno fomentó este “voto unido”. Todos los candidatos que habían sido aprobados de antemano por la Comisión de Candidaturas resultaron elegidos, puesto que el PC obtuvo el 98 por ciento del voto y consiguió 606 de los 614 escaños en la Asamblea Nacional. Según el Gobierno, más de 1,4 millones de votantes (el 17% del total) mutilaron las papeletas o se abstuvieron de otra manera de las elecciones.

Elecciones y participación política

Los candidatos a los cargos provinciales y nacionales deben ser aprobados previamente por las agrupaciones de masas, como las asociaciones del partido para la mujer y la juventud, controladas por el Gobierno. Un pequeño grupo de dirigentes, bajo

la guía del Presidente, selecciona a los integrantes de los órganos normativos del más alto nivel del PC, el Buró Político y el Comité Central. Aunque no es requisito específico, en la práctica ser miembro del Partido Comunista es indispensable para ocupar los cargos oficiales de alto nivel y para los ascensos profesionales.

El Gobierno lleva un expediente de cada niño, desde el preescolar al final de la enseñanza secundaria, en el que se anota la participación del menor en las actividades políticas, como son las marchas obligatorias. La participación plena en las actividades políticas es esencial para progresar por el sistema escolar, por ejemplo, estar afiliado a la Unión de Pioneros de Cuba (Organización de Pioneros José Martí), una asociación juvenil regimentada que el Gobierno utiliza con fines de adoctrinamiento.

De los 24 integrantes del Buró Político, dos son mujeres, mientras que de los 118 miembros del Comité Central, las mujeres son 15. Las mujeres ocupan seis escaños de los 31 del Consejo de Estado y 265 de los 614 de la Asamblea Nacional.

Cinco de los escaños del Buró Político fueron ocupados por personas de origen africano. Luego de la selección de la ANPP en febrero, el Gobierno desglosó su composición racial como sigue: 64 por ciento de blancos, 19 por ciento de negros, y 16 por ciento de raza mixta.

Corrupción gubernamental y transparencia

La ley prevé la imposición de sanciones penales por corrupción oficial; sin embargo, el Gobierno no aplica la ley de forma eficaz y, con frecuencia, los funcionarios se dedican a la corrupción con impunidad.

Según los indicadores mundiales de la buena administración pública del Banco Mundial, la corrupción oficial constituye una lacra importante. La prensa independiente y la oficial publican información sobre incidentes de corrupción de funcionarios. Varias fuentes fiables confirman que a principios de año, un tribunal condenó a Carlos García, director de la empresa estatal Guama, y a Miguel Quintana, director de la empresa estatal de importaciones MATCO, a 20 años de reclusión por operaciones ilícitas y corrupción. El Tribunal Supremo sostuvo ese veredicto en julio.

Los funcionarios no están sujetos a ninguna ley especial de que les obligue a revelar sus finanzas personales. La ley estipula el encarcelamiento de tres a ocho años por enriquecimiento ilícito de las autoridades o los empleados del Gobierno. Todas las dependencias del Gobierno, especialmente el Ministerio de Auditoría y Control y el Ministerio del Interior, están a cargo de combatir la corrupción y la ilegalidad, lo que incluye el enjuiciamiento de funcionarios públicos.

La ley prevé el acceso público a la información oficial pero, en la práctica, las solicitudes de información se rechazan, a menudo por el pretexto de que ese acceso no constituye un derecho.

Sección 4 Actitud oficial respecto a las investigaciones internacionales y no gubernamentales acerca de las presuntas infracciones de los derechos humanos

En contravención de sus propias leyes, el Gobierno no reconoce a los grupos internos de derechos humanos ni les permite funcionar legalmente. Varias asociaciones de defensa de los derechos humanos siguen actuando fuera de la ley, incluidas la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), el Movimiento Cristiano de Liberación, la Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil y la Fundación Lawton de Derechos Humanos. El Gobierno somete a los defensores nacionales de los derechos humanos a intimidación, hostigamiento y represión intensos, incluidas las amenazas de muerte y desaparición.

El Gobierno también ha organizado de vez en cuando actos de repudio, para los que moviliza a militantes comunistas y otros para celebrar concentraciones públicas encaminadas a intimidar y excluir de la sociedad a los afiliados a las agrupaciones disidentes.

El Gobierno también ha tomado medidas para impedir la circulación de los activistas; en muchas ocasiones, los agentes de Seguridad del Estado, la policía y el populacho han impedido a las Damas de Blanco y a los pertenecientes a otros grupos disidentes viajar a La Habana o a otras partes del país para participar en reuniones pacíficas.

El Gobierno se ha negado a permitir la vigilancia internacional de los derechos humanos. Ningún Relator Especial de las Naciones Unidas ha visitado el país. El Gobierno sigue negándose a que las asociaciones de defensa de los derechos humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja tengan acceso a los presos y detenidos políticos.

Sección 5 Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La Constitución prohíbe la discriminación por motivos de raza, género, discapacidad o condición social; sin embargo, la discriminación racial ocurre frecuentemente.

Mujeres

La ley penaliza la violación, incluida la violación en el matrimonio, y el Gobierno la hace cumplir. El Gobierno no ha divulgado estadísticas durante el año acerca de los arrestos, enjuiciamientos y condenas por violación. La oficina de La Habana del *Women's News Service for Latin America and the Caribbean* (SEMIac, Servicio Noticioso Femenino para América Latina y el Caribe), una ONG que defiende la causa de la mujer, no considera que las violaciones sean muy frecuentes.

La ley no reconoce la violencia doméstica como una categoría específica de la violencia pero prohíbe amenazar e infligir lesiones, incluidas las causadas por la violencia doméstica. Las penas por la violencia doméstica las abarcan las leyes contra

la agresión, que van desde multas hasta condenas de prisión de diferente duración, según la gravedad del delito.

Los defensores de los derechos humanos informan que la violencia contra la mujer constituye una lacra y que la policía con frecuencia no actúa en los casos de violencia doméstica. La prensa raramente informa acerca de los delitos de violencia y el Gobierno no divulga datos sobre la violencia en el hogar. Sin embargo, la CCDHRN y la Sección de Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales informan que la violencia doméstica es un mal grave y que se carece de programas para proteger a las víctimas.

Con el fin de concienciar acerca de la violencia doméstica, el Gobierno ha llevado a cabo unas campañas en los medios informativos durante el año. Según calcula la CCDHRN, muchas mujeres no notifican los incidentes de violencia por temor a que, al hacerlo, desaten otras agresiones.

La prostitución pueden ejercerla legalmente los mayores de 17 años; sin embargo, el proxenetismo y las actividades económicas que facilitan la prostitución, incluido el alquiler de habitaciones, son ilegales. Pero grandes números de turistas extranjeros que visitan el país acuden a las prostitutas. Hay sospechas de que algunos agentes de la policía protegen la prostitución.

La ley prevé sanciones por acoso sexual, con condenas de tres meses a cinco años de cárcel. Esta ley se ha usado con mayor frecuencia contra los supervisores varones que abusan del poder que tienen sobre sus subordinadas, según la CCDHRN. El Gobierno no ha divulgado estadísticas durante el año acerca de arrestos, enjuiciamientos o condenas por delitos relacionados con el acoso sexual. Las pruebas anecdóticas hacen sospechar al SEMIac que el acoso sexual está muy extendido.

La ley dispone que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y responsabilidades en cuanto al matrimonio, el divorcio, la crianza de los hijos, la manutención del hogar y la carrera profesional. La ley concede a las madres trabajadoras acceso preferente a bienes y servicios. La ley estipula el pago igual por igual trabajo y las mujeres, por lo general, perciben remuneraciones equiparables a las de los hombres por trabajos parecidos.

Niños

Por lo general, el Gobierno está comprometido a los derechos y el bienestar de los niños; la ley estipula que todos los niños poseen los mismos derechos ante la ley y que los padres tienen el deber de protegerlos.

No se manifiesta ninguna tendencia social al abuso infantil.

La prostitución de menores es una lacra grave; hay jóvenes que se dedican a la prostitución para ayudar a mantenerse a sí mismas y a sus familias. Aunque la

prostitución de menores es evidente, no hay estadísticas confiables acerca de su extensión.

Trata de personas

La ley prohíbe la mayoría de las formas de la trata de personas. No obstante, se conocen casos de trata de mujeres desde el país a México, las Bahamas y Europa, y de trata de niños en el país para su explotación sexual.

Es difícil medir la índole y el alcance de la trata en el interior del país debido al carácter cerrado del Gobierno y a la falta de informes de las ONG. Sin embargo, algunos ciudadanos que habían logrado emigrar en lanchas rápidas se han visto forzados a trabajar como marineros en posteriores viajes de contrabando de personas para pagar las deudas de su propio viaje.

La ley castiga a cualquiera que induzca al ejercicio de la prostitución, o colabore en el mismo o lo promueva o se beneficie del mismo. Si la infracción lleva aparejada la entrada de la víctima en el país o su salida del mismo, las penas oscilan entre los 20 y los 30 años de reclusión. La ley prevé penas de siete a quince años de reclusión por la trata con fines de trabajos forzados y de prostitución y por el tráfico de órganos, tanto con el exterior como dentro del país. La ley estipula penas de cuatro a diez años de reclusión por inducir de cualquier manera o de fomentar que otra persona se dedique a la prostitución o al comercio carnal. Esa condena aumenta a plazos de diez a veinte años para todo el que amenace o fuerce a otro a dedicarse a la prostitución. La ley estipula, asimismo, penas de 20 a 30 años para los condenados por proxenetismo después de una condena previa o para los acusados de fomentar habitualmente la prostitución.

Los tribunales de lo penal pueden condenar a daños y perjuicios, las llamadas “responsabilidades”, que se pagan a la víctima a través del tribunal. La CCHRN expone que en los casos de trata interna, en lugar de presentar la acusación de trata de personas, el Gobierno a veces acusa de “proxenetismo”.

No se cuenta con estadísticas confiables sobre el número de traficantes enjuiciados o condenados durante el año. La CCDHRN manifiesta que aunque no puede hacer cálculos exactos, había un gran número de personas encarceladas por “proxenetismo”, pero no queda claro si en realidad traficaban con personas o meramente facilitaban el trabajo de los dispuestos a realizarlo. Todos los encausados o condenados habían llegado al país procedentes de los Estados Unidos, México u otros países, como las Bahamas.

Los Ministerios de Justicia y Educación, la PNR y los gobiernos municipales están encargados de los diversos aspectos del combate contra la trata de personas y la prostitución de menores. Ninguna autoridad tiene completa autonomía, por sí misma, para tratar de esos asuntos. La policía está a cargo de investigar y detener a los traficantes, el Ministerio de Justicia, de enjuiciar y encarcelarlos, y el Ministerio de

Educación, de rehabilitar a las prostitutas. No hay información acerca de la asistencia del Gobierno a las investigaciones internacionales de la trata de personas ni sobre la extradición de los traficantes.

No se conocen investigaciones ni enjuiciamientos de funcionarios por complicidad en la trata durante el año transcurrido, aunque llegan informes de que algunos agentes de la policía aceptan sobornos del comercio sexual del país.

Pese a que la prostitución no es de por sí un delito, los que se dedican a la prostitución, incluidas las posibles víctimas del tráfico y los menores, a menudo se les trata como delincuentes y lleva a centros de rehabilitación que carecen de personal capacitado y de equipamiento adecuado para la atención a las víctimas.

El Gobierno, en colaboración con el Gobierno británico y una ONG de la misma nacionalidad, administra un centro en La Habana dedicado al tratamiento de los menores que son víctimas del abuso sexual. En este centro se emplean las técnicas más modernas, entre ellas, la de preparar a los niños para que sean testigos en procesamientos penales. No se conoce que haya programas gubernamentales dirigidos a evitar la trata.

El *Trafficking in Persons Report* (Informe sobre la Trata de Personas), que publica anualmente el Departamento de Estado, se puede encontrar en la Internet en www.state.gov/g/tip.

Personas con discapacidades

No se conoce ninguna ley que prohíba la discriminación oficial contra las personas discapacitadas en el empleo, la educación, el acceso a la asistencia sanitaria o la prestación de otros servicios estatales; sin embargo, una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social concede a las personas discapacitadas el derecho a oportunidades iguales de empleo y a pago igual por igual trabajo. No hay discriminación oficial contra las personas con discapacidades. No hay leyes que obliguen a que los edificios sean accesibles a esas personas. En la práctica, los edificios y los transportes rara vez resultan accesibles a los discapacitados.

La Dirección de Enseñanza Especial del Ministerio de Educación está a cargo de la educación y formación de los niños discapacitados. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el encargado del Programa de Empleo para las Personas con Discapacidad.

Minorías nacionales, raciales o étnicas

Los afrocubanos sufren a menudo de la discriminación racial, por ejemplo, los paran con frecuencia desproporcionada para verificar sus documentos de identidad y registrar sus mochilas y pertenencias personales, o para insultarlos o dirigirles epítetos raciales. Una diplomática extranjera de raza negra ha sido parada a menudo por la policía, que indaga si es ciudadana y qué hace en ciertos distritos. Los afrocubanos están representados de forma desproporcionada en las barriadas que sufren las peores condiciones de vivienda y están desfavorecidos en cuestión de empleo, en parte por la discriminación en el empleo, especialmente la que sufren en los servicios al turismo. El Gobierno no intenta resolver la discriminación racial ya que niega que la haya.

Otros abusos y discriminación sociales

Persiste la discriminación social contra los homosexuales, y la policía a menudo llevó a cabo redadas en las zonas donde se congregan los homosexuales, en especial en ciertas secciones del malecón habanero. Las asociaciones de defensa de los derechos de los homosexuales informan de casos de despido por razón de la orientación sexual del empleado. Algunos que han contraído VIH/SIDA sufren de discriminación en el empleo o son rechazados por sus familias. El Gobierno tiene en funcionamiento cuatro prisiones exclusivamente para las víctimas de VIH/SIDA; algunos reclusos cumplen condenas por “propagar una epidemia”.

Mariela Castro, la hija del Presidente, dirige el Centro Nacional de Educación Sexual y promueve abiertamente los derechos de los homosexuales. En mayo, organizó una semana de programas para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia, en la cual algunos programas televisados fomentaron la tolerancia de los homosexuales. El 6 de junio, el Gobierno anunció la oferta de cirugía gratuita para el cambio de sexo. Sin embargo, las asociaciones extraoficiales de defensa de los derechos de los homosexuales, como el Movimiento de Liberación Homosexual, afirman que el

Gobierno no ha tomado medidas para poner fin a los casos frecuentes de violencia y hostigamiento policial de los homosexuales y que Mariela Castro no ha respondido a sus peticiones de reunirse con ellos. El 25 de junio, las fuerzas de Seguridad del Estado impidieron que una coalición de defensa de los derechos de los homosexuales celebrara una marcha de “orgullo homosexual” por La Habana, deteniendo a los organizadores e intimidando a los presuntos participantes con la presencia de gran número de policías en el punto de partida.

Sección 6 Derechos de los trabajadores

a. El derecho de asociación

La ley no permite a los trabajadores formar ni integrar sindicatos de su elección. En su lugar, el Estado tiene establecidos sindicatos oficiales y no permite la competencia de los sindicatos independientes. Los sindicatos oficiales tienen la función de movilizar las masas y no actúan como tales sindicatos, porque no promueven los derechos de los trabajadores ni protegen el derecho a la huelga. Esos sindicatos se hallan bajo el control del Estado y del PC, que también administran las mismas empresas que emplean a los trabajadores. Debido a que todos los sindicatos legales son entidades oficiales, la discriminación contra los sindicatos, por definición, no existe.

El PC selecciona a los dirigentes de la única central obrera legal, la CTC (Central de Trabajadores de Cuba), cuya principal obligación es asegurar que se cumplan los objetivos oficiales de producción. Prácticamente todos los trabajadores se ven obligados a pertenecer a la CTC y los ascensos de puesto frecuentemente se limitan a los miembros del Partido que participan en las marchas, la humillación pública de disidentes y otras actividades obligatorias organizadas por el Estado.

Los trabajadores a menudo pierden el empleo a causa de sus creencias políticas, incluida la negativa a afiliarse al sindicato oficial. El 20 de julio, la Dirección Nacional de Impuestos Internos retiró la licencia de barbero a Luis Pérez Gómez porque pertenecía a un sindicato independiente, la Central Sindical Cristiana (CSC).

Existen varios pequeños sindicatos independientes, que funcionan sin reconocimiento jurídico; los ejemplos más destacados son el Sindicato de Conductores de Bicitaxis, la CSC y la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Esas asociaciones también sufren el hostigamiento de la policía y la infiltración de agentes del Gobierno; no pueden representar a los obreros eficazmente ni trabajar por su causa.

El Gobierno continúa encarcelando a los activistas obreros independientes. Cinco de los siete dirigentes sindicalistas independientes encarcelados en 2003 permanecen en prisión, cumpliendo condenas de 12 a 25 años. Pedro Pablo Álvarez Pedroso, presidente del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos, fue liberado el 15 de febrero después de cumplir 17 años de una condena de 30; Álvarez Pedroso y otros tres presos políticos fueron puestos en libertad para dirigirse a España.

La ley no prevé la huelga y no se sabe que hubiera ocurrido ninguna durante el año.

b. El derecho a la sindicación y a la concertación de convenios colectivos de trabajo

A pesar de que la ley lo dispone, en la práctica no existe el derecho a la concertación de convenios colectivos de trabajo.

En febrero, un decreto del Gobierno se dirigía a vincular la paga con el rendimiento del obrero, pero para fin de año esa correlación aún no se había puesto en práctica.

La ley niega a todos los trabajadores, excepto a los que tienen permiso especial del Gobierno, el derecho a suscribir contratos directamente con empresas extranjeras que invierten en el país. A pesar de que unas pocas empresas han podido negociar excepciones, el Gobierno obliga a los inversionistas extranjeros y a las representaciones diplomáticas a contratar trabajadores por medio de las agencias de empleo del Estado. Las empresas extranjeras y las representaciones diplomáticas pagan las agencias en moneda fuerte, pero las agencias pagan a los trabajadores solamente una fracción de ese ingreso. Los trabajadores subcontratados por las agencias de empleo estatales deben reunir ciertos requisitos políticos. Las agencias de empleo estatales consultan con el PC, la CTC y la Unión de Jóvenes Comunistas para asegurarse de que los trabajadores seleccionados "merecen" trabajar en empresas mixtas.

La última zona franca para la elaboración de exportaciones se clausuró en 2006.

c. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley no prohíbe el trabajo obligatorio o forzoso de los adultos; a los presos condenados por ciertos delitos, como el de "peligrosidad" se les obliga a trabajar en granjas o en sitios donde se realizan labores agrícolas o metalúrgicas o de construcción. Las autoridades a menudo encarcelan a los que se niegan a trabajar en los centros laborales a los que han sido destinados.

Los sindicatos oficiales organizan regularmente trabajo obligatorio, no pagado, llamado "trabajo voluntario", ya sea para labores de producción ordinaria o para llevar a cabo otras tareas como reparaciones, limpieza, pintura, decoración, o movilizar una gran fuerza laboral agrícola.

La ley prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio de los niños, pero el Gobierno exige que los menores trabajen en ciertas circunstancias (véase la sección 6.d).

El 8 de agosto, un tribunal extranjero resolvió a favor de tres cubanos que habían demandado a la *Curaçao Drydock Corporation*, un astillero de Curazao, por haberlos obligado a trabajar sin remuneración, en connivencia con el Gobierno de Cuba, para contribuir a devolver una suma que dicho Gobierno adeudaba al astillero. El 20 de octubre, el tribunal extranjero fijó para los tres una indemnización de \$80 millones.

d. La prohibición del trabajo infantil y la edad mínima de empleo

La ley prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio de niños y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está a cargo de su cumplimiento. Sin embargo, hay varias circunstancias en las que el Gobierno obliga a los niños a trabajar.

Los estudiantes en internados rurales deben participar en labores manuales durante varias horas al día. Los estudiantes de las escuelas secundarias deben dedicar hasta 15 días de sus vacaciones del verano a la realización de varias tareas que van desde el trabajo agrícola hasta la limpieza urbana, por las cuales se les paga una pequeña remuneración. Los estudiantes de las instituciones de enseñanza intermedia entre la secundaria y la superior (escuelas técnicas, institutos preuniversitarios y agronómicos) deben dedicar de 30 a 45 días al año a ciertas labores, principalmente agrícolas. Negarse a realizar el trabajo agrícola o alguna labor sustitutiva puede resultar en la expulsión de la institución donde estudian, aunque eso ocurre raras veces.

La edad mínima laboral es de 17 años, pero el Código Laboral permite el empleo de jóvenes de 15 y 16 años de edad para que se capaciten o suplan la falta de mano de obra. Sin embargo, en la práctica no es corriente que trabajen los menores de 17 años. El Código Laboral no permite a los adolescentes trabajar más de 7 horas al día o 40 a la semana o durante las vacaciones. Los menores que tengan entre 13 y 18 años no pueden trabajar en determinadas ocupaciones peligrosas, como la minería, ni tampoco de noche.

No se conoce de ningún programa oficial que impida el trabajo infantil o que retire a los niños de ese tipo de trabajo.

e. Condiciones de trabajo aceptables

El salario mínimo que fija el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social varía según la ocupación. En promedio, el salario mensual mínimo es de unos 225 pesos (\$9). El Gobierno complementa el salario mínimo con la educación gratuita, la asistencia médica (la paga diaria se reduce en un 40% después del tercer día de estancia en un hospital), la vivienda, y algunos alimentos subvencionados. Incluso con esas subvenciones, el Gobierno reconoce que el salario mínimo no basta para que el trabajador y su familia tengan un nivel de vida digno.

La semana laboral normal es de 44 horas, pero es más corta en ocupaciones peligrosas como la minería. La ley dispone para los trabajadores un período semanal de descanso de 24 horas. Esas normas se aplican en la realidad. La ley no prevé un pago mejor por concepto de horas extraordinarias ni prohíbe las horas extraordinarias obligatorias, pero limita el número de horas extraordinarias que se pueden trabajar por semana o por año. La remuneración por las horas extraordinarias se paga en efectivo según el mismo jornal horario que el normal o se paga en horas de asueto adicionales, especialmente para los que trabajan directamente en la producción o la prestación de servicios; estas normas no se aplican al personal de gerencia. Los obreros se quejan a menudo de que la remuneración por horas extraordinarias o no se paga o se paga

tarde. La ley da pocas razones para que un obrero se niegue a trabajar horas extraordinarias. Negarse a hacerlo puede tener la consecuencia de que aparezca una anotación en el expediente laboral del empleado, lo cual puede poner en peligro la aprobación de sus solicitudes posteriores de vacaciones.

Las leyes que estipulan el control de las condiciones ambientales y de seguridad en los puestos de trabajo son inadecuadas, y el Gobierno carece de mecanismos eficaces para asegurar su cumplimiento. La ley establece que el trabajador que considere que su vida peligra por las condiciones peligrosas tiene derecho a negarse a trabajar en ese puesto o a participar en ciertas actividades hasta que esos riesgos se eliminen. El trabajador sigue obligado a trabajar temporalmente en cualquier otro empleo que se le asigne con el salario que disponga la ley.

El antiguo presidente de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba ha declarado el 19 de octubre que se presentan numerosas infracciones de las leyes sobre salud y seguridad en los lugares de trabajo de todo el país y que las condiciones son especialmente peligrosas en la industria de la construcción. Los soldadores y los que manipulan plaguicidas, declaró, suelen carecer de equipo de protección. Los conductores de camión de las empresas estatales a menudo encuentran que sus vehículos están en malas condiciones. Ha declarado, asimismo, que la CTC rara vez informa a los trabajadores de sus derechos y no responde a los obreros que se quejan de los peligros de su trabajo ni los ayuda. Por ejemplo, el 20 de julio doce trabajadores del Centro de Trabajo Minimax de La Lisa se quejaron oficialmente al jefe comercial del distrito de La Lisa acerca de las condiciones antihigiénicas en que trabajaban, por ejemplo, los servicios obstruidos o estropeados y un tejado que estaba en peligro inminente de colapso, pero no han recibido respuesta alguna.